

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil diecisiete.

**VISTOS:**

**Demandas acumuladas.**

**Demanda deducida ante el 19° Juzgado Civil de Santiago.**

A fojas 5 comparece ante este 19° Juzgado Civil de Santiago el abogado don Jorge Ríos Ibacache, domiciliado en Prat N° 827, oficina 802, octavo piso, Valparaíso y en Valentín Letelier 1373, oficina 605, Santiago, en representación de a) don **Rigoberto Neira Castro**, jubilado y b) de doña **Avelina Barahona Torres**, labores de casa, ambos domiciliados en calle Riquelme 1316, Coronel y deducen demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de: a) **Empresa Portuaria Coronel S.A.** (en adelante también EPCSA), representada por su gerente general don Javier Andwanter Hammersley, domiciliados en calle Carlos Prats 40, Coronel; b) **Compañía Puerto de Coronel S.A.** (en adelante también CPCSA), representada por don Javier Andwanter Hammersley, domiciliados en calle Carlos Prats 40, Coronel; c) **Inversiones Puerto Coronel S.A.** (en adelante también IPCSA), representada por Javier Andwanter Hammersley, domiciliados en calle Carlos Prats 40, Coronel; y d) **CMB-Prime AFI S.A.**, Administradora de Fondos de Inversión (en adelante también CMB), representada por su gerente general señor Juan Eduardo Vargas Peyreblanque, ingeniero civil, ambos domiciliados en Avda. Apoquindo N° 3.000, oficina 1602, Las Condes, Santiago. Funda su acción sobre la base de los siguientes antecedentes:

1.- Como cuestión previa señala que todas las demandadas tienen en común un negocio que comparten y que dice relación con la



actividad portuaria que desarrollan en el puerto de Coronel. Empresa Portuaria Coronel S.A. es la encargada de la estiba y desestiba o muellaje, que contrata trabajadores para movilizar cargas o mercancías; Compañía Puerto de Coronel S.A., que administra el puerto; Inversiones Puerto Coronel S.A. es un holding que controla la persona jurídica anterior; y CMB-Prime AFI S.A. tiene por objeto administrar los fondos de inversión y es una de las dueñas de la Empresa Puerto de Coronel.

2.- En cuanto a los hechos refiere que el señor Orlando Abdón Neira Barahona, hijo de su parte, esto es, de los señores Rigoberto Neira Castro y Avelina Barahona Torres, se desempeñaba como movilizador portuario de contenedores en la Empresa Portuaria Coronel S.A., empresa dedicada a la estiba y muellaje, contratista de la empresa mandante Compañía Puerto de Coronel S.A., dueña o administradora esta última del recinto portuario, contaba con 42 años de edad y 10 años de servicio, percibiendo un ingreso mensual de \$600.000 aproximadamente. El día 16 de diciembre de 2010, como a las 17:00 horas aproximadamente, se le ordenó al señor Neira realizar operaciones portuarias para consolidar (estibar) contenedores e ingresar carga perteneciente a la empresa Masisa. Debía consolidar cuatro contenedores con planchas y materiales pertenecientes a la aludida Masisa, siendo la carga madera aglomerada que venía envuelta en un plástico resbaladizo, de 68 centímetros de alto, 1,20 metros de ancho, por 2,40 metros de largo, de un peso de 1.538 kilos por paquete, que debían posicionarse unos sobre otros. Se realizó la carga o consolidado de tres contenedores de manera tradicional pero debido al cambio de dimensiones de la carga, en el cuarto contenedor



de 40 pies High Cube se debió realizar una estiba de carga distinta y desconocida por los trabajadores hasta ese momento. Se hicieron consultas a la supervisión de Portuaria Coronel S.A., específicamente a un señor llamado Marcelo Puga, quien autorizó finalmente a introducir la carga, lo que implicó que los trabajadores debían ingresar al interior del contenedor a trincar o asegurar la carga. La partida de trabajo era de siete personas, un supervisor, dos operadores de grúas horquilla, dos movilizadores y dos tarjadores.

3.- A las 17:30 horas encontrándose la carga de dos paquetes de madera suspendida en la grúa horquilla operada por el gruelero Renato Anabalón, el trabajador señor Neira Barahona, que estaba al costado de la maniobra, procedió a afirmar o trincar con cintas una carga de madera ya depositada al interior del contenedor. En ese momento entró al contenedor la grúa horquilla con los dos últimos paquetes de madera y uno de ellos cayó sobre el señor Neira, aplastándolo completamente, dejándolo gravemente lesionado.

4.- Refieren los actores el mal estado de la grúa y todos los factores de riesgo que importaba una inseguridad y peligrosidad de la maniobra.

5.- El señor Orlando Neira, luego de ser aplastado por el enorme y pesado paquete de madera masisa, fue ingresado de urgencia a un Hospital pero debido a la gravedad del golpe sufrido murió en el trayecto, certificándose como causa de la muerte politraumatismo/aplastado por paquete de madera/accidente laboral.

6.- Señalan enseguida los demandantes las condiciones inseguras de la grúa horquilla, del contenedor, las características de la carga, de la plataforma de ingreso al contenedor, de la bodega 10



donde ocurrió el hecho y que la empresa mandante instruyó la realización de dicho trabajo sin realizar el análisis de riesgo que correspondía, dado el cambio en las condiciones de la dimensión de la carga.

7.- Cita las disposiciones y la doctrina relativa a la responsabilidad extracontractual añadiendo la llamada “Doctrina del Riesgo”, citando también lo que dispone el artículo 184 del Código del Trabajo y las normas reglamentarias correspondientes.

8.- Hacen presente los actores que ha solicitado que los demandados respondan solidariamente y hace notar que en el caso de la Compañía Puerto de Coronel S.A. esta también es responsable subsidiariamente en su calidad de dueña de la obra o faena, citando al efecto el artículo 64 del Código del Trabajo. Cita, asimismo, la doctrina de la “culpa de la organización”.

9.- En cuanto a los perjuicios solicita, a título de daño moral, \$150.000.000 para cada uno de los actores por el sufrimiento consistente en la pérdida de un hijo.

Termina pidiendo se acoja la demanda y se condene las demandadas, solidariamente, al pago de \$300.000.000 a título de daño moral, o a la suma que el tribunal determine, más reajustes e intereses, con costas.

**Demanda deducida ante el 8° Juzgado Civil de Santiago en autos rol 12.742-2014 y acumulados a estos antecedentes del 19° Juzgado Civil.**

A fojas 180 el abogado don Jorge Ríos Ibacache, ya individualizado, en representación esta vez de a) doña **Karin Ivonne Sepúlveda Muñoz**, paramédico, la que actúa por sí y a su vez en



representación de sus dos hijas menores de edad b) **Leslie Kathleen Neira Sepúlveda** y c) **Catalina Araceli Neira Sepúlveda**, ambas estudiantes, y también en representación de su hija d) **Michelle Yannina Neira Sepúlveda**, mayor de edad, estudiante, todas domiciliadas en Esmeralda N° 317, Coronel, deduce demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de: a) **Empresa Portuaria Coronel S.A.**, representada por su gerente general don Javier Andwanter Hammersley, domiciliados en calle Carlos Prats 40, Coronel; b) **Compañía Puerto de Coronel S.A.**, representada por don Javier Andwanter Hammersley, domiciliados en calle Carlos Prats 40, Coronel; c) **Inversiones Puerto Coronel S.A.**, representada por Javier Andwanter Hammersley, domiciliados en calle Carlos Prats 40, Coronel; y d) **CMB-Prime AFI S.A.**, Administradora de Fondos de Inversión, representada por su gerente general señor Juan Eduardo Vargas Peyreblanque, ingeniero civil, ambos domiciliados en Avda. Apoquindo N° 3.000, oficina 1602, Las Condes, Santiago.

Funda su demanda en exactamente los mismos hechos señalados a propósito de la primera demanda y citando los mismos argumentos de derecho, lo que no se reitera por ser inoficioso.

En cuanto al perjuicio señala que su parte ha sufrido un lucro cesante de \$230.400.000 señalando que la edad laboral útil de una persona de sexo masculino en Chile es de 65 años de edad y la edad promedio de un varón es de 74 años, de modo que si la víctima tenía al momento de fallecer 42 años y su remuneración mensual promedio era de \$600.000, la multiplicación da como resultado la cantidad referida, esto es, \$230.400.000. Por daño moral solicita para la viuda



señora Sepúlveda y para cada una de las tres hijas de apellidos Neira Sepúlveda la cantidad de \$150.000.000, esto es, en total, \$600.000.000.

Pide se acoja la demanda y se condene a las demandadas a pagarles la suma de \$830.400.000 a título de lucro cesante y daño moral, o la suma que el tribunal determine, más reajustes e intereses, con costas.

**Contestación de ambas demandas por parte de CMB-Prime Administradora de Fondos de Inversión S.A.**

Esta demandada, en adelante CMB, contestó las demandas a fojas 97 y 397 en los siguientes términos:

1.- Salvo la ocurrencia del fallecimiento del señor Orlando Neira Barahona, acaecido el 16 de diciembre de 2010, su parte desconoce todas y cada una de las alegaciones formuladas a lo largo de la demanda. Niega especialmente la efectividad de todas aquellas alegaciones destinadas a establecer que a CMB le cupo algún grado de responsabilidad en la muerte del señor Neira y, por ende, de pagar indemnización alguna.

2.- Alega la improcedencia del estatuto de solidaridad pasiva invocado por los demandantes. Ha dicho la actora que EPCSA, CPCS A e IPCSA y su parte, CMB, son solidariamente responsables pues ésta tendría la calidad de accionista de CPCS A, sociedad que a su vez es accionista de EPCSA, empleadora del señor Neira, de modo que las actividades económicas de EPCSA reportarían un beneficio pecuniario para CMB.

3.- Lo anterior es insuficiente para tener por establecida una responsabilidad solidaria pues no se ha señalado que hecho ilícito



concreto habría cometido CMB que a su vez habría desembocado en la muerte del señor Neira, agregando que CMB no es accionista de ninguna de las otras demandadas de autos.

4.- Alega también falta de legitimación activa de los padres del señor Neira, los actores señores Neira Castro y Barahona Torres, pues la acción empeece únicamente a la viuda y a las tres hijas del causante. Cita al efecto doctrina y jurisprudencia, además del artículo 108 del Código Procesal Penal y concluye que debe establecerse un orden de prelación entre las víctimas del daño causado por un acto ilícito de modo que los familiares más cercanos excluyan a los más remotos.

5.- Señala, además, que su parte no tiene legitimación pasiva pues no es accionista de EPCSA. La ley 20.712 sobre Administradoras de Fondos de Inversión establece que éstas deben constituirse como sociedades anónimas especiales cuyo objeto exclusivo será la administración de recursos de terceros, legislación que permite concluir que una administradora de fondos de inversión y un fondo de inversión propiamente tal constituyen dos entidades completamente separadas, que las administradoras de fondos de inversión tienen un giro especial y único, consistente en la administración de recursos de terceros y que la única relación existente entre una entidad y la otra son los servicios de administración que la administradora presta al fondo.

6.- CMB sólo presta servicios de administración a un fondo de inversión que a su vez es una de varias accionistas de CPCSA, quien a su vez es una de las accionistas de EPCSA, empleadora del trabajador fallecido.



7.- En subsidio de lo anterior, CMB no ha desplegado ninguna conducta culpable que haya causado la muerte del trabajador señor Neira, a lo que añade que niega la existencia de los perjuicios demandados y el nexo de causalidad entre la muerte del trabajador y los supuestos perjuicios señalados en la demanda.

8.- Sobre esto último, refiere que en todo caso la muerte del trabajador se debió a causas generadas por él mismo pues su parte ha tomado conocimiento que los trabajadores de EPCSA y particularmente el señor Neira Barahona sí estaban debidamente capacitados para efectuar maniobras de consolidación de carga derivada de la industria maderera.

9.- En subsidio, pide una reducción de los montos adeudados.

**Contestación de ambas demandas hechas por las demandadas EPCSA, CPCS A e IPCSA.**

A fojas 111 y 374 dichas partes contestaron ambas demandas en el siguiente sentido:

1.- Es efectivo que el día 16 de diciembre de 2010, mientras el señor Orlando Neira Barahona desarrollaba labores de consolidación de contenedores en las dependencias del puerto de Coronel sufrió un accidente que le produjo lesiones graves y luego la muerte. Sólo esto es cierto de lo afirmado en la demanda.

2.- La demanda es inexacta al afirmar que se debió realizar una estiba de carga distinta y desconocida para los trabajadores. El puerto de Coronel está en la VIII región que tiene actividades económicas esencialmente forestales de modo que los trabajadores involucrados en las operaciones de consolidados del puerto conocen a cabalidad y se encuentran plenamente familiarizados con el proceso de





consolidado de tableros, rollizos, maderas aserradas, maderas aglomeradas y otros productos derivados de la madera. Los contenedores “High Cube” no son para nada desconocidos para los trabajadores del puerto, siendo frecuentemente utilizados para la consolidación de maderas y sus productos derivados. No es efectivo que la carga fuese particularmente resbaladiza por cuanto el material con que estaban envueltos los paquetes era del tipo “Film Alusa”, con el objeto, precisamente, de prevenir la ocurrencia de eventuales deslizamientos. Agrega que el señor Neira Barahona recibió suficiente capacitación a lo largo de los años anteriores a la ocurrencia del accidente.

3.- CPCSA dispone de un procedimiento denominado “Procedimiento: Consolidado y Desconsolidado de Contenedores” vigente desde abril de 2009 cuyo objeto es “...*mediar soluciones prácticas y eficientes para minimizar la ocurrencia de un accidente con daño a las personas, propiedad y al medio*”, procedimiento que fue puesto en debido conocimiento de los trabajadores, incluido el señor Neira Barahona, agregando que en forma diaria, antes de comenzar la faena, se imparte a los distintos equipos de trabajo charlas destinadas a organizar y coordinar las respectivas faenas, participando el señor Barahona, el día del accidente, de la aludida charla, recibiendo instrucciones necesarias para una eficiente y segura ejecución del procedimiento de consolidado.

4.- El accidente se produjo, de acuerdo a la demanda, encontrándose el señor Neira al interior del contenedor al momento que ingresó la grúa horquilla con los dos últimos paquetes de madera, para terminar la estiba y trinca y es el caso que de acuerdo al



procedimiento de Consolidado, el trabajador accidentado nunca debió haber estado al interior del contenedor al momento en que la carga de madera estaba siendo posicionada. Cita la letra I del N° 5 del Procedimiento de Consolidado: “[Se deberá] mantener cuidado con ser atrapado en el interior del contenedor al desconsolidar o consolidar cargas...”. O sea, el accidente tuvo lugar, precisamente, porque el señor Neira Barahona, infringiendo el Procedimiento de Consolidado que le era plenamente conocido, se encontraba al interior del contenedor al momento en que se posicionaba la carga de madera, incurriendo en una imprudencia que no le fue ni ordenada, ni solicitada, ni sugerida por su parte.

5.- El supervisor señor Marcelo Puga, mencionado en la demanda como el que había autorizado esta nueva forma de cargar o consolidar, impartió a los trabajadores las instrucciones de trabajo en las que indicó que estos no debían ingresar al contenedor mientras la carga estuviese siendo posicionada por la grúa horquilla, de acuerdo a lo señalado en el Procedimiento de Consolidado. El señor Puga señaló, además, que minutos antes del accidente pudo verificar que el procedimiento se estaba llevando a cabo de acuerdo a las instrucciones, sin notar dificultad alguna ni confusión por parte del personal.

6.- Las faenas desarrolladas al interior del puerto de Coronel se sujetan a altos estándares de seguridad, encontrándose bajo la fiscalización de diversas autoridades por lo que no es efectivo que existan las condiciones inseguras de trabajo que menciona la parte demandante.



7.- Describe, enseguida, en forma gráfica (fojas 118 y 117, en ese orden) la forma en que habría ocurrido el accidente.

8.- Sostiene que los padres del trabajador fallecido no tendrían legitimación activa arguyendo que el ejercicio de la acción de daños por repercusión se limita sólo a los familiares más directos de la persona fallecida, de modo tal que la deducida por el cónyuge sobreviviente y los hijos excluyen a todo otro familiar.

9.- Afirma la falta de legitimación activa de IPCSA por cuanto esta sociedad no interviene activamente en la administración del puerto de Coronel. IPCSA es el accionista mayoritario de CPCSA y tan sólo mantiene un porcentaje marginal en la propiedad de EPCSA pero, en todo caso, la administración y operación del puerto de Coronel se encuentran por completo encomendadas a dos empresas independientes y autosuficientes, como son las dos últimas mencionadas.

10.- Refiere que la legislación laboral citada por los actores no es aplicable a la especie pues la acción ha sido deducida por los padres, cónyuge e hijas del trabajador fallecido, actuando a título personal, demandando precisamente bajo el estatuto de la responsabilidad extracontractual. Y a este respecto manifiestan la inaplicabilidad del estatuto de responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno pues esta exige en forma perentoria que se demande a uno o más dependientes y, asimismo, que se acredite inequívocamente que éstos han incurrido en un ilícito civil y, en la especie, no se ha accionado en contra de ningún dependiente de su parte.

11.- No concurren los requisitos de la responsabilidad extracontractual por el hecho propio pues no se puede imputar dolo o



culpa a su parte; hace ver que la responsabilidad es subjetiva y no objetiva y que responde de la culpa leve. A este respecto su parte ha adoptado todas las medidas exigibles a un empresario prudente y diligente con el objeto de prevenir la ocurrencia de accidentes y así asegurar que el procedimiento se realizara con la mayor precisión, eficiencia y seguridad posible. Lo anterior lleva a que tampoco hay un nexo causal con alguna conducta de su parte y el resultado dañoso, pues la muerte del señor Neira Barahona se debió a su propia imprudencia.

12. En subsidio alega la exposición imprudente al daño como causal de reducción de la apreciación del daño.

**Resolución que recibió la causa a prueba.**

A fojas 540, modificado a fojas 562, se recibió la causa a prueba fijándose como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los siguientes:

1.- Efectividad de haber ocurrido los hechos imputados en la demanda.

2.- Existencia de los perjuicios y daños demandados. En la afirmativa, naturaleza y monto de los mismos.

3.- Negligencia y responsabilidad de la demandada ante los hechos descritos en la demanda.

4.- Efectividad de que las demandadas cumplieron con su obligación de adoptar todas las medidas de seguridad para evitar el accidente de autos.

5.- Efectividad que la demandada contaba con las autorizaciones y los elementos de seguridad necesarios al momento del accidente, y



que estos elementos de seguridad y protección fueron proporcionados al trabajador fallecido.

**Citación a oír sentencia definitiva.**

A fojas 849, el once de enero de este año, se citó a las partes a oír sentencia definitiva.

**CONSIDERANDO:**

**En cuanto a objeciones documentales.**

**PRIMERO:** Que a fojas 713 la parte demandante objetó los documentos signados con los números 2 al 28 del escrito de fojas 623 presentado por las demandadas EPCSA, CPCSA e IPCSA por tratarse de copias sin que a su parte le conste su autenticidad, veracidad, integridad ni fecha, petición a la que éstas se opusieron a fojas 749.

**SEGUNDO:** Que la objeción será rechazada porque sólo se ha hecho ver el valor probatorio que tales documentos tendrían, de acuerdo a la opinión de los actores, sin que, en realidad, se los haya impugnado derechamente por falsos o por faltos de integridad.

**TERCERO:** Que a foja 740 las mencionadas demandadas han objetado los documentos acompañados por los actores a través de sus presentaciones de fojas 606, 612, 613, 618, 622, 631, 633 y 675 por no constarle su autenticidad material e ideológica pues, agrega, se trata de documentos emanados de terceros ajenos al juicio que no han concurrido a estrados a reconocerlos. Los actores han pedido el rechazo de tal impugnación a fojas 752.

**CUARTO:** Que al igual que en el caso anterior, no se ha alegado ni la falsedad ni la falta de integridad de los instrumentos objetados, de modo que no se trata de una impugnación propiamente dicha, lo que basta para desechar la petición de las aludidas demandadas, sin



perjuicio que los informes psicológicos emanados de la señora Marcela Vera Marín fueron reconocidos por ésta en su testimonial de fojas 700.

**En cuanto al fondo.**

**QUINTO:** Que establecida la controversia en los términos señalados en la parte expositiva, que no se reiterará por inoficioso, surgen los siguientes hechos pacíficos:

1.- El señor Orlando Abdón Neira Barahona era trabajador dependiente de EPCSA y su labor era la de movilizador portuario encargado de la estiba muellaje de carga en el puerto de Coronel, especialmente productos derivados de la madera. Dicho trabajador había nacido el 30 de agosto de 1967 y contaba con diez años de servicio en su puesto.

2.- El día 16 de diciembre de 2010, cerca de las 17:00 horas, encontrándose el señor Neira Barahona en sus labores de estiba de madera aglomerada en la Bodega 10 del puerto de Coronel y habiendo entrado a un contenedor de aquellos denominados “High Cube”, una carga de dicha madera llevada por una grúa horquilla guiada por el señor Renato Anabalón Anabalón, trabajador dependiente del puerto de Coronel, se salió de los brazos de esta máquina y cayó encima del señor Neira Barahona causándole lesiones graves que luego, el mismo día, significaron su muerte por politraumatismo.

3.- Los demandantes señor Rigoberto Neira Castro y señora Avelina Barahona Torres son el padre y la madre, respectivamente, del fallecido señor Neira Barahona.



4.- El 26 de octubre de 2015 falleció la señora Avelina Barahona Torres (certificado de fojas 766).

5.- Las demandantes señora Karin Ivonne Sepúlveda Muñoz y las señoritas Leslie Kathleen Neira Sepúlveda, Catalina Araceli Neira Sepúlveda y Michelle Yannina Neira Sepúlveda son, la primera, cónyuge sobreviviente del difunto señor Neira Barahona y, las tres últimas, sus hijas.

**SEXTO:** Que antes de entrar a dilucidar la forma y circunstancias exactas en que ocurrió el accidente referido, deben precisarse algunas cuestiones puramente jurídicas, a saber, la legitimación pasiva de CMB y de IPCSA y la situación de los demandantes padres de la víctima fallecida.

**SÉPTIMO:** Que en cuanto a CMB desde luego no se advierte por qué razón habría de responder solidariamente, junto a las demás demandadas, por la muerte a que se ha hecho referencia. En caso de existir un ilícito civil ciertamente CMB no ha podido cometerlo, ninguna participación tuvo ni ha tenido jamás en la administración del puerto de Coronel y en la demanda no se le imputa ninguna conducta que haya podido llevar al lamentable desenlace que se conoce en estos antecedentes. Y que CMB sea o no accionista de alguna de las otras demandadas -hecho que CMB ha negado en todo caso- no tiene ninguna relevancia para estos efectos pues no se advierte bajo que estatuto jurídico un accionista de una sociedad anónima puede responder por los actos desplegados por esta persona jurídica. CMB es una Administradora de Fondos de Inversiones S.A. regida por la ley 20.712 y, en tal calidad su objeto único, por ley, no es otro que el de administrar fondos de inversión y que uno de estos, Fondo de



Inversiones Prime-Infraestructura, sea accionista de alguna de las otras demandadas de ninguna manera puede llevar a concluir que CMB puede tener participación en la administración del mencionado puerto. Luego, ciertamente esta demandada carece de legitimación pasiva y las demandas, a su respecto, deben ser rechazadas.

**OCTAVO:** Que en cuanto a IPCSA, tampoco hay evidencia en el proceso que permita demostrar que de alguna manera participe en las operaciones o en la administración del puerto de Coronel y, por lógica, ninguna conducta ha podido desplegar que haya llevado al resultado dañoso conocido. Ciertamente IPCSA es parte de un conglomerado de empresas que incluye a EPCSA y a CPCS, pero por ese sólo hecho no puede responder si se atiende a que la administración y operación del puerto están a cargo de estas dos últimas demandadas. No se trata aquí de un caso de abuso de la personalidad jurídica para perjudicar a los acreedores que pudiere hacer concluir que mediante un fraude a la ley las otras dos sociedades -EPCSA y CPCS- no tienen ningún patrimonio o solvencia. Luego, que IPCSA sea accionista de las otras dos sociedades y que todas formen parte de un grupo empresarial no la hace responsable por los daños causados a raíz de la muerte de un trabajador en funciones propias del trabajo portuario.

**NOVENO:** Que en cuanto a la demandante señora Avelina Barahona Torres, de acuerdo al certificado de fojas 766 murió el 26 de octubre de 2015 y como en su demanda de fojas 5 sólo solicitó una reparación a título de daño moral, dicha acción necesariamente debe ser rechazada por cuanto éste es intransmisible al ser personalísimo. Luego, su acción se ha extinguido con su muerte.





**DÉCIMO:** Que en cuanto a la acción del padre del trabajador fallecido, el señor Rigoberto Neira Castro, debe tenerse presente que también ha demandado indemnización de perjuicios, incluyendo el daño moral, la cónyuge sobreviviente y las hijas del difunto señor Neira Barahona, de modo que la acción de aquél en ningún caso puede prosperar. En efecto, el profesor Enrique Barros Bourie en su obra “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, Editorial Jurídica, 2008, páginas 354 y siguientes, señala que *“es una delicada tarea de la jurisprudencia establecer un equilibrio razonable entre los diversos intereses en juego en la reparación del daño afectivo por muerte de otra persona, sobre la base de criterios que permiten definir las preguntas críticas en la materia: i) quiénes pueden pretender una reparación; ii) cómo concurren o se excluyen las pretensiones cuando existen varios actores; iii) cómo se prueba el perjuicio afectivo; y iv) cómo se le valora”*. Y precisamente, respondiendo la primera pregunta, cabe señalar que es lo cierto que la muerte de una persona puede provocar un sufrimiento efectivo, verdadero, en muchas personas, familiares o amigos o, incluso, tratándose de personas con connotación pública, como determinados artistas o deportistas, el número de personas que ha sufrido un daño moral cierto y comprobable puede elevarse a miles o cientos de miles. De este modo, y siempre conforme a la doctrina sustentada por el autor citado, que este tribunal hace suya, no puede ser indemnizado el dolor de todos los que lo han sufrido y debe definirse a los titulares de la acción en una suerte de orden de prelación de acuerdo a la cercanía que dan la relación conyugal, la convivencia civil, el parentesco y el concubinato, *“de modo que los parientes más cercanos excluyen a los*



*más remotos*” (obra citada, página 354), a la manera de los órdenes de sucesión. Luego, en la especie, existiendo cónyuge sobreviviente y descendientes demandando indemnización por la responsabilidad extracontractual de las demandadas, la eventual obligación de estas -de EPCSA y de CPCS- de indemnizar por este estatuto y, específicamente el daño moral –único solicitado por el padre de la víctima-, aplicando por analogía las reglas de la sucesión abintestato, sólo comprende a dicha cónyuge y a dichas descendientes (artículo 988 del Código Civil). La autora Carmen Domínguez Hidalgo, en su obra “El Daño Moral”, Editorial Jurídica, 2000, Tomo II, página 740, refiere que sobre este tema la jurisprudencia nacional ha sustentado una doctrina de acuerdo a la que la muerte de una persona “*produce un sufrimiento a los familiares más próximos*”, lo que no significa, desde luego, que los familiares más remotos no hayan sufrido por dicha muerte, sino que al momento de indemnizar, el obligado a ello se libera reparando el dolor emocional de aquellos sin que deba resarcir, además, a estos. Concluir lo contrario importaría, ciertamente, ampliar el espectro de posibles titulares del daño moral hasta límites inconmensurables, bastando para ello demostrar la existencia de relaciones de afecto con la víctima y de una aflicción por la muerte de ésta, lo que no parece ni prudente ni jurídicamente aceptable. En todo caso, si se aplica el artículo 108 del Código Procesal Penal como disposición análoga, en vez del artículo 988 de Código Civil, se llega a la misma conclusión pues aquella norma contempla, a propósito de la regulación de la titularidad de la acción civil en caso de muerte del ofendido, un determinado orden de prelación que parece adecuado, también, a la hora de determinar la precedencia en materia de



titularidad de la acción que pretende resarcimiento por el daño moral: *“Para los efectos de este Código, se considera víctima al ofendido por el delito”*.

*“En los delitos cuya consecuencia fuere la muerte del ofendido y en los casos en que éste no pudiese ejercer los derechos que en este Código se le otorgan, se considerará víctima:*

- a) **al cónyuge o al conviviente civil y a los hijos;***
- b) a los ascendientes;*
- c) al conviviente;*
- d) a los hermanos, y*
- e) al adoptado o adoptante”*.

*“Para los efectos de su intervención en el procedimiento, la enumeración precedente constituye un orden de prelación, de manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a una categoría excluye a las comprendidas en las categorías siguientes”*.

Consecuentemente, la demanda del padre, el señor Neira Castro, será desestimada.

**UNDÉCIMO:** Que, aclarado lo anterior, es decir, que las demandas, en cuanto van dirigidas en contra de IPCSA y en contra de CMB serán desestimadas y que la acción deducida por la ahora difunta señora Avelina Barahona Torres y por el señor Rigoberto Neira Castro correrá la misma suerte, debe dilucidarse lo que hace a la demanda de la cónyuge e hijas del difunto en relación a las demandadas EPCSA y CPCSA.

**DUODÉCIMO:** Que la responsabilidad extracontractual se define como aquella que proviene de la comisión de un delito o cuasidelito



civil que ha inferido daño o injuria a otro, existiendo un nexo de causalidad entre ambos y que deriva en la obligación de indemnizar para aquel que comete el ilícito, recogida en el artículo 2314 del Código Civil. En consecuencia, los requisitos que deben concurrir necesariamente para estar frente a este tipo de responsabilidad, son los siguientes: 1) Acción u omisión del agente; 2) La culpa o dolo de su parte; 3) Que no concurra una causal de exención de responsabilidad; 4) El daño o perjuicio a la víctima; y, 5) Relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido. No se trata, entonces, como lo hace ver de alguna manera la demandante en parte de sus argumentaciones, de una responsabilidad objetiva, atribuible al que crea el riesgo y que sólo importe el nexo causal entre el riesgo creado y el daño sufrido: debe demostrarse el dolo o la culpa por el que lo alega.

**DECIMOTERCERO:** Que hay evidencia suficiente que demuestra la culpa de las demandadas EPCSA y CPCS A en el luctuoso resultado conocido en estos antecedentes. Por de pronto es un hecho de la causa que el accidente ocurrió en circunstancias que el trabajador señor Neira Barahona estaba al interior del contenedor afirmando y estibando planchas de madera aglomerada, ingresando en ese momento una grúa horquilla con otras planchas del mismo material, cayéndose una de estas encima del aludido operario, maniobra que no estaba permitida y era menester, para operar dicha grúa dentro del contenedor, que no hubiera ningún trabajador en su interior. Por eso la autoridad marítima, en sumario 31/2010 de la Gobernación Marítima de Talcahuano, cuya copia se ha guardado en custodia, sancionó al trabajador Renato Anabalón Anabalón, esto es,



precisamente por operar la grúa en el contenedor en circunstancias que el señor Neira estaba en su interior. Y sabido es que el artículo 2320 del Código Civil hace a las personas responsables también por el hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado de modo que por este sólo hecho, por la negligencia de un dependiente de las demandadas EPCSA y CPCSA, deben responder por la muerte del trabajador tantas veces mencionado. Dichas sociedades han señalado que en la demanda no se ha hecho ver la responsabilidad por el hecho ajeno -que en realidad es siempre por el hecho propio, por aquello de la culpa in vigilando- y que no se ha demandado individualmente al trabajador causante del accidente pero debe recordarse que por el aforismo *iura novit curia* el juez está obligado para aplicar de oficio la norma jurídica que corresponda a los hechos entregados por las partes. Así ha sido resuelto por la Corte Suprema al señalar en reiterada doctrina que al apreciar los hechos del pleito los jueces tienen amplia facultad para agregar las explicaciones de las partes, aún las que ellas no han dado y que sirven para esclarecer la cuestión, y no incurrir por eso en *ultra petita*; y que no le está vedado al tribunal sentenciador consignar los razonamientos que crea conducentes siempre que no alteren las acciones y excepciones que se han opuesto en el juicio. Y en la especie ninguna alteración se está haciendo, la demanda es de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual y eso es lo que se está resolviendo en definitiva de acuerdo al principio por el cual el juez aplica el derecho a los hechos entregados y probados por las partes: *da mihi facta, dabo tibi iu*. Si el daño ha sido producido por el hecho culpable de una persona capaz que se encuentra al cuidado de otra, la ley



presume la culpa de ésta última, *“en otras palabras, al demandante corresponde probar la culpa del agente, pero se presume la culpa del guardián”*, según se encarga de precisar Enrique Barros Bourie en su obra “Tratado de Responsabilidad Extracontractual” (Editorial Jurídica 2006, página 167) y, ciertamente, es un hecho demostrado con el proceso administrativo llevado por la autoridad marítima que el encargado de la grúa, el señor Anabalón, dependiente de EPCSA y de CPCSA o sólo de la primera -hecho aceptado por las partes, en todo caso-, desplegó una conducta claramente negligente que terminó, finalmente, con la vida del señor Neira Barahona. Y en cuanto a que no se ha accionado en contra del señor Barahona -en vez de eso se optó por demandar a personas jurídicas ajenas a este conflicto como CMB e IPCSA-, se ha dicho incluso que en estos casos puede haber una culpa anónima, caracterizada porque inequívocamente hubo un dependiente que incurrió en negligencia, aunque al demandante resulte imposible individualizarlo (obra citada, página 189) y de este modo se ha fallado que *“no puede admitirse que la acción establecida en el inciso 5° del artículo 2320 citado esté sujeta a la condición de que se designen de un modo preciso, por sus nombres, a los empleados o dependientes que hayan sido los causantes del daño”* (sentencia de la Corte Suprema de 11 de enero de 1924, Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XXVIII, sección 1ª, página 912), de manera que basta con señalar que el operario de la grúa, dependiente de las demandadas mencionadas, desplegó una conducta ilícita que causó la muerte del señor Neira Barahona para que opere, en efecto, el estatuto de responsabilidad extracontractual de acuerdo al citado



artículo 2320 del Código Civil, aunque se sepa la identidad de dicho empleado y aunque no haya sido demandado.

**DECIMOCUARTO:** Que, sea como fuere, aun sin recurrir a la noción de la llamada responsabilidad por el hecho ajeno, igualmente la demanda debe ser acogida respecto de la cónyuge e hijas del difunto señor Neira Barahona. En efecto, declara a fojas 814 doña Macarena Andrea Silva Zamorano, prevencionista de riesgos, quien señala que le correspondió hacer un peritaje relacionado con el accidente del señor Orlando Abdón Neira Barahona en el sumario llevado a cabo por la autoridad marítima y agregado a los autos en copia que está en custodia del tribunal -que se ha tenido a la vista- y que concluye que el procedimiento de trabajo en la estiba de la madera en el contenedor, en ese momento preciso, esto es, el 16 de diciembre de 2010, era inapropiado e incorrecto, debiendo el supervisor a cargo haber dado instrucciones precisas de la manera segura de hacer la labor. A esta declaración el tribunal, de acuerdo a la regla 1ª del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de una testigo imparcial y verídica, le asigna el valor de base de una presunción judicial que, por tener los caracteres de gravedad y precisión suficiente, hace completa prueba para demostrar lo dicho, a saber, que el accidente se produjo debido a la negligencia de EPCSA y de CPCSA en la formulación de un procedimiento seguro de estiba de la carga mencionada en las circunstancias propias del trabajo que precisamente se desarrollaba ese día 16 de diciembre de 2010 en la Bodega 10 del puerto de Coronel.

**DECIMOQUINTO:** Que, empero, es un hecho demostrado, también, que el difunto señor Neira Barahona se expuso



imprudentemente al daño y, por lo tanto, de acuerdo a la que dispone el artículo 2330 del Código Civil, la apreciación del daño debe quedar sujeta a reducción. En efecto, sin perjuicio de la responsabilidad del conductor de la grúa, dependiente de las aludidas demandadas y de las que se atribuye a éstas, resulta que el sumario instruido por la Gobernación Marítima de Talcahuano, al que ya tantas veces se ha hecho referencia, “sanciona” al señor Orlando Neira Barahona por la infracción de “permanecer al interior de un contenedor, mientras se efectuaba faena de consolidado”, sanción que obviamente carece de todo sentido si el sancionado está muerto pero, para lo que interesa a este juicio, importa el establecimiento de culpa del propio trabajador, lo que obliga a la rebaja que señala la citada norma. Asimismo, de los documentos acompañados por las demandadas EPCSA y CPCSA a fojas 623, guardados en custodia, se aprecia que estas efectuaban periódicas charlas de seguridad al personal, incluyendo al señor Neira y que existía un procedimiento de consolidado y desconsolidado de contenedores de fecha 1 de abril de 2009 y un Procedimiento de Consolidado de Maderas de 29 de octubre de 2010, que necesariamente han debido ser conocidas del señor Neira Barahona, señalando el último documento que “queda estrictamente prohibido el ingreso de carga al contenedor estando personal al interior de éste”.

**DECIMOSEXTO:** Que la demanda de fojas 180, en cuanto pretende el resarcimiento del lucro cesante, será desestimado. Por de pronto, ninguna prueba hay de su existencia y ciertamente, lo pedido, \$230.400.000 al multiplicar \$600.000 -monto de su remuneración- por el número de años que al trabajador fallecido le faltaba para cumplir 74 -tenía 42 al momento de su muerte-, escapa con mucho a lo que debe





entenderse por este capítulo del daño. Se define al lucro cesante como aquél que el acreedor ha dejado de ganar en virtud del no cumplimiento por parte del deudor o, lo que es igual, lo que el acreedor hubiera obtenido si el deudor hubiera cumplido oportunamente. Al efecto se sostiene que se deben indemnizar **sólo las utilidades realmente probables y no las posibles** (Arturo Alessandri Rodríguez: “De La Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno”, Ediar Editores, 2ª Edición, 1983, Tomo II, página 551). Luego, el albur que siempre importa la indemnización del lucro cesante no puede llevar a extremos de suponer, como lo hacen las actoras, que el difunto señor Neira Barahona, de no sufrir el accidente, habría vivido hasta los 74 años, habría laborado siempre para las demandadas y habría obtenido por ello una remuneración mensual de \$600.000. Ciertamente un raciocinio como ese podría agotar las posibilidades más extremas, con la única limitación que la conclusión pueda efectivamente suceder. Luego, como es posible que suceda todo lo que señala la demanda, entonces, en esa lógica, procede lucro cesante: mas no es esa la idea de este tipo de daño, no es eso lo que se debe indemnizar por este concepto, sólo son resarcibles los **daños probables, jamás aquellos que son sólo posibles** pues, en tal caso, se llegaría a que todo aquello que pueda suceder en el futuro, con el único límite de la imaginación -que, sabemos, no la tiene-, habría de ser resarcible. Tal pretensión escapa a lo que el artículo 1556 del Código Civil entiende por lucro cesante y a lo que la doctrina y la jurisprudencia, de muy antiguo, han dicho sobre esta institución. Y en todo caso tampoco se entiende por qué el albur de dicha ganancia perdida pueda ser un daño para las actoras,



esto es, que lo que no ganó el señor Neira Barahona pueda ser un daño patrimonial efectivo de su cónyuge e hijas.

**DECIMOSÉPTIMO:** Que el daño moral de las actoras está demostrado con los documentos de fojas 604, 607, 610 y 619, emanados de la psicóloga Marcela Vera Marín, quien los reconoció a fojas 700, y que hacen, entonces, de acuerdo al artículo 346 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, plena prueba acerca del sufrimiento que han debido soportar la cónyuge y las tres hijas del fallecido señor Neira Barahona, sufrimiento que debe ser avaluado de la única forma posible, en dinero. Entiende el tribunal que cada una de las aludidas actoras debe indemnizárselas, por este concepto, con \$20.000.000 mas, al aplicar la regla del artículo 2330 del Código Civil, como se ha señalado, obligatoriamente tal resarcimiento debe ser reducido, disminución que se hará en un 50%, quedando, en definitiva, una indemnización a cada actora, de \$10.000.000.

**DECIMOCTAVO.** Que, en resumen:

1.- Las demandadas IPCSA y CMB carecen de legitimación pasiva y la acción deducida en su contra debe ser desestimada.

2.- La madre del difunto señor Neira Barahona, señora Avelina Barahona Torres, murió el 26 de octubre de 2015 y su demanda, en que pretendía resarcimiento de daño moral, no puede prosperar.

3.- La demanda del padre del difunto señor Neira Barahona, don Rigoberto Neira Castro, no puede ser acogida porque están demandado también indemnización por daño moral la cónyuge e hijas del causante y ellas prefieren a cualquier ascendiente del difunto.

4.- Las demandadas EPCSA y CPCSA responden extracontractualmente por los daños causados a raíz de la muerte del



mencionado señor Neira Barahona por dos razones: a) porque su trabajador dependiente don Renato Alfonso Anabalón Anabalón, fue negligente al operar una grúa horquilla dentro de un contenedor a pesar de constatar que el señor Neira Barahona estaba en su interior apilando la carga de madera aglomerada, razón por la cual aquél fue sancionado por la autoridad marítima; y b) porque a pesar que las empresas mencionadas habían capacitado a los trabajadores, incluido el señor Neira, en la forma de trabajar en el consolidado de contenedores y que estaba prohibido estar en el interior de un contenedor cuando operaba la grúa horquilla, el día de los hechos el procedimiento de trabajo en la estiba de la madera en el contenedor era inapropiado e incorrecto, debiendo el supervisor correspondiente haber dado instrucciones precisas de la manera segura de hacer la labor, según lo concluyó la perito correspondiente en el sumario de la autoridad marítima.

5.- Pese a lo anterior, el difunto señor Neira Barahona, al permanecer al interior de un contenedor a pesar de estar trabajando en él una grúa horquilla, se expuso imprudentemente al daño.

6.- El lucro cesante no está demostrado.

7.- Sí lo está el daño moral que se fija en \$20.000.000 para cada actora pero que se reduce en un 50% por la aplicación del artículo 2330 del Código Civil, quedando así en \$10.000.000 para cada actora.

**DECIMONOVENO:** Que el resto de la prueba rendida en el proceso no altera lo que se viene razonando. En efecto:

1.- La documental de fojas 623 da cuenta del cumplimiento por parte de las demandadas EPCSA y CPCSA de las obligaciones de seguridad laboral, instruyendo a los trabajadores en general y al señor



Neira en particular, de los riesgos de sus labores y de la forma de hacer el consolidado de maderas en el puerto de Coronel. Sin embargo, se ha entendido que han actuado con negligencia tanto por la conducta del conductor de la grúa, dependiente suyo, cuanto por la falta de cuidado y correcta supervisión ocurrida precisamente el día del accidente, de acuerdo a las conclusiones del sumario de la Gobernación Marítima.

2.- El documento de fojas 655 no ha sido reconocido en juicio por quien lo emitió y, por ende, ningún valor se le dará.

3.- Las copias de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público no aportan nada nuevo a las conclusiones anteriores.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que **se rechazan** las objeciones documentales de fojas 713 y 740 hechas por los actores y las demandadas Empresa Portuaria Coronel S.A., Compañía Puerto de Coronel S.A. e Inversiones Puerto Coronel S.A., respectivamente.

II.- Que **se rechaza** la demanda de fojas 5 en todas sus partes, sin costas por haber tenido los actores Rigoberto Neira Castro y Avelina Barahona Torres motivos plausibles para litigar.

III.- Que la demanda de fojas 180, en cuanto se dirige en contra de Inversiones Puerto Coronel S.A. y de CMB-Prime AFI S.A. queda **rechazada**, sin costas por haber tenido las actoras Karin Ivonne Sepúlveda Muñoz, Leslie Kathleen Neira Sepúlveda, Catalina Araceli Neira Sepúlveda y Michelle Yannina Neira Sepúlveda motivos plausibles para litigar en contra de dichas sociedades.



IV.- Que **se acoge** la demanda de fojas 180 en cuanto se dirige en contra de Empresa Portuaria Coronel S.A. y Compañía Puerto de Coronel S.A. y se condena a estas personas jurídicas a pagar solidariamente a las demandantes Karin Ivonne Sepúlveda Muñoz, Leslie Kathleen Neira Sepúlveda, Catalina Araceli Neira Sepúlveda y Michelle Yannina Neira Sepúlveda, a título de daño moral, sendas indemnizaciones de \$10.000.000, las que serán reajustadas de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y la del pago; tales cantidades, así reajustadas, devengarán el interés corriente para operaciones reajustables desde que esta sentencia quede ejecutoriada y hasta el pago.

V.- Que no se condena en costas a las demandadas Empresa Portuaria Coronel S.A. y Compañía Puerto de Coronel S.A.

Regístrese y devuélvase.

N° 14.859-2013.

Dictada por don Juan Cristóbal Mera Muñoz, Ministro en Visita Extraordinaria. Autoriza doña Patricia Hurtado Guzmán, Secretaria Subrogante.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 13 de agosto de 2017, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>